

NUESTRA AMÉRICA VERDE

DIÁLOGO SOCIAL PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA

Memoria 2020

FUTURO DEL TRABAJO JUSTICIA TRIBUTARIA CIUDADES SOSTENIBLES

SISTEMAS ALIMENTARIOS VERDES



NUESTRA
AMÉRICA
VERDE

FRIEDRICH
EBERT 
STIFTUNG

NUESTRA AMÉRICA VERDE
DIÁLOGO SOCIAL PARA UNA
TRANSICIÓN JUSTA 2020

Memoria 2020

ISBN 978-956-7630-87-5

Coordinador General
América Verde

Rodrigo Echeopar Kisic

Edición y Coordinación

Pedro Glatz Brahm

Investigación y textos

Pedro Glatz Brahm

Diagramación y Diseño

Catalina Risso Rodríguez

Impreso en

Caupolicán Servicios Gráficos

Dieciocho 786, Santiago

Fono 226716467

Obra sujeta a la licencia Reconocimiento -No Comercial- Compartir Igual: 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0> El presente libro fue publicado gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

ÍNDICE

04	PRESENTACIÓN
08	CAPÍTULO 1: Los desafíos laborales de la agenda verde de recuperación que el momento exige. ¿Dónde quedan los trabajadores?
09	Introducción: Desafíos y oportunidades en el mundo del trabajo
10	Las claves de la automatización
11	Crisis ecológica y climática
13	Referencias Bibliográficas
14	Desarrollo del taller
14	Taller de discusión
15	Asistencia
16	Principales conclusiones
19	Webinar
20	CAPÍTULO 2: ¿Cómo financiamos la Recuperación Verde Latinoamericana?
21	Introducción: Analizando el financiamiento para la transición
22	¿Qué hacer?
24	¿Cuánto hay que recaudar?
26	¿Cómo se financia esta hoja de ruta?
28	Referencias Bibliográficas
29	Desarrollo del taller
29	Taller de discusión
30	Asistencia
31	Principales conclusiones
35	Webinar
36	CAPÍTULO 3: ¿Cómo se transforman las ciudades en una Recuperación Verde?
37	Introducción: La realidad de las ciudades en Latinoamérica, un panorama general
38	Problemas y riesgos en las ciudades de América Latina y el Caribe
40	La reactivación sostenible y la Agenda Regional Urbana
43	¿Qué medidas para las ciudades en la recuperación verde?
44	Referencias Bibliográficas
46	Desarrollo del taller
46	Taller de discusión
47	Asistencia
48	Principales conclusiones
49	3.3 Webinar
50	CAPÍTULO 4: Transformar nuestros sistemas alimentarios para la transición ecológica
51	Introducción: Panorama general de los sistemas alimentarios en la región
52	Historia y desarrollo
53	Una mirada a la situación actual
55	¿Qué medidas para avanzar hacia nuevos sistemas alimentarios?
57	Referencias Bibliográficas
59	Desarrollo del taller
59	Taller de discusión
60	Asistencia
61	Principales conclusiones

PRESENTACIÓN

Nuestra América Verde (NAVE) busca insertar en el debate político ideas de un Plan de Recuperación Verde a través de medidas de transformación económica y social que enfrenten la emergencia climática. Trabajando propuestas desde una perspectiva de justicia social y cooperación latinoamericana, nuestra iniciativa busca impulsar una narrativa de creación de empleos, mayor calidad de vida e igualdad.

Ante la coyuntura de la crisis sanitaria y económica producto del COVID19, buscamos revalorizar el espíritu de cooperación internacional que con tanta urgencia necesita la región. Éste debe plasmarse en una hoja de ruta latinoamericana que incluye transformaciones profundas en nuestro modelo de desarrollo regional e iniciativas conjuntas de inversión en investigación y desarrollo, planteando financiamiento de carácter redistributivo. Buscamos que las medidas propuestas a nivel continental promuevan la discusión y acción política/social que tenga por objetivo avanzar en una transición justa a nivel local, nacional y regional.

Durante este año, en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert impulsamos una iniciativa de diálogo social respecto a la transición ecológica desde el contexto chileno. Este documento recoge el desarrollo de ese proyecto, que abarca 4 áreas sensibles de nuestras instituciones socioeconómicas, donde requerimos transformaciones profundas urgentemente. Éstas comprenden los desafíos del mundo del trabajo, el cómo financiamos las impostergables y radicales políticas que NAVE ha puesto sobre la mesa, la construcción de ciudades sostenibles y equitativas y la necesidad de reformar profundamente nuestros sistemas alimentarios.

Este Informe recoge la complejidad de modificar la forma en que entendemos el desarrollo social, económico y ecológico en la región. El camino en esta nueva dirección está lleno de desafíos que pudimos discutir y sopesar con un destacado grupo de especialistas, activistas, dirigentes sindicales y organizaciones de la sociedad civil. El documento se estructura en torno a las 4 áreas mencionadas y contempla un breve documento de contexto, el desarrollo de la metodología propuesta en cada taller y la recopilación de 3 discusiones abiertas en formato videoconferencia. Cada una finaliza con el resumen de las principales conclusiones a las que llegamos en las sesiones de conversación y servirán para retroalimentar nuestra propuesta.

Agradecemos a la Fundación Friedrich Ebert por el apoyo en la realización de esta iniciativa, así como especialmente a los participantes en las actividades que consideró el proyecto y al equipo que acompañó este proceso.

Rodrigo Echeopar

Coordinador General NAVE







1.

Desafíos laborales de una Recuperación Verde

2.

¿Cómo financiaremos la Recuperación Verde Latinoamericana?

3.

¿Cómo se transforman las ciudades en una Recuperación Verde?

4.

Transformar nuestros sistemas alimentarios para la transición ecológica

CAPÍTULO 1

Desafíos laborales de una Recuperación Verde

INTRODUCCIÓN

Desafíos y oportunidades en el mundo del trabajo

El mundo del trabajo se encuentra en constante cambio, sin embargo las proyecciones actuales nos muestran una creciente preocupación y tratamiento preferencial sobre el futuro de éste. Este proceso está desarrollándose tanto por parte de la academia, las organizaciones internacionales y la opinión pública global y nacional como también por los mismos afectados por esta situación: los actores del mundo económico, es decir, los trabajadores y los propietarios del capital (empresas).

El principal motivo de discusión apunta a las transformaciones que están ocurriendo en la naturaleza del trabajo. Una de las causas de este fenómeno incluye las consecuencias del desarrollo e implementación de tecnologías en los procesos de producción y desarrollo de actividades económicas. Por otra parte cabe mencionar las implicancias laborales de la crisis ecológica y climática, que influirá de manera tanto o más intensa en los cambios que el trabajo experimentará en los años venideros. Por ello, a continuación se realizará una breve caracterización de ambos elementos, para finalizar el documento con una enunciación de otras temáticas que es necesario considerar para guiar este urgente debate.

LAS CLAVES DE LA AUTOMATIZACIÓN

Durante los últimos años la preocupación por los devastadores efectos potenciales que puede tener el proceso denominado como “automatización” ha aumentado considerablemente. Una serie de informes de organizaciones internacionales (Nedelkoska, & Quintini (2018); Banco Mundial, 2017) y obras académicas y de difusión (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Ford, 2014) han alertado sobre esta inquietante situación. Los riesgos de destrucción de innumerables puestos de trabajo, situados en el contexto de una economía global con bajos índices de crecimiento y en una dinámica de creciente desigualdad, han fortalecido la idea de que la automatización es un proceso que tarde o temprano transformará radicalmente la naturaleza del trabajo. Sin embargo, una breve revisión de la literatura permite matizar el carácter alarmista de las proyecciones más radicales y situar el debate mediante la identificación del comportamiento actual y futuro de las principales variables de este proceso.

En primer lugar, es necesario destacar que la inserción de cambios tecnológicos durante los últimos años sí ha generado importantes transformaciones en el mundo del trabajo. De manera general, es posible señalar que de manera global no se observa una pérdida de trabajos por parte del uso de tecnologías, al medirlo en términos totales. Sin embargo sí ha ocurrido sustitución de empleos por “robots”, la cual ha sido compensada por aumentos en la producción, en particular en el ámbito industrial (Banco Mundial, 2017). Por lo anterior, aún es complejo evaluar de manera clara los impactos negativos que la automatización puede tener en el trabajo.

No obstante lo anterior, hay transformaciones en la naturaleza del trabajo que sí generan preocupación. En primer lugar, se prevén pérdidas de empleos en áreas de baja calificación, las cuales están amenazadas por la posibilidad cierta de ser sustituidas por medios tecnológicos. Asimismo, la inserción de tecnologías digitales ha propiciado un creciente proceso de precarización laboral, en especial a través de las empresas que han liderado el sector basado en las plataformas digitales, las cuales se caracterizan por crear muy pocos puestos de trabajo de calidad (Snircek, 2016). Para el caso chileno, la cifra de trabajadores en el negocio de la conducción a través de estas plataformas sobrepasa las 100.000 personas.

En general se observa en las economías desarrolladas un efecto de polarización del empleo. Es decir, las ocupaciones de baja y alta calificación aumentan su participación en el total de empleos, perdiéndose los trabajos que se encuentran en la medianía. Sin embargo este proceso pareciera aún no desarrollarse de forma relevante en nuestro país, debido al menor ritmo de la adopción de tecnologías y la mayor rigidez del mercado laboral nacional. (Fundación Chile, 2017).

En el marco de estas dinámicas, es posible mencionar que dentro de las ocupaciones más amenazadas con ser reemplazadas como consecuencia de la adopción de nuevas tecnologías, se encuentran las ocupaciones llamadas elementales (entre las que se incluyen limpiadores, peones de la minería, la construcción, el sector agropecuario, vendedores ambulantes, ayudantes de preparadores de alimentos, entre otros), agricultores y trabajadores del agro (Fundación Chile, 2017). Esto debe ser contrastado con el análisis de un reciente estudio comparado que planteó que cerca de un tercio de los trabajos de los sectores industriales, construcción y ventas tienen alto riesgo de automatización en Chile (PWC, 2018). En definitiva, la situación aún es aún incierta como para predecir un curso de evolución del mercado laboral chileno, no obstante, existen antecedentes suficientes como para observar con atención el fenómeno que se avecina, en particular en las áreas sensibles mencionadas y en el constante crecimiento del empleo en las plataformas digitales.

CRISIS ECOLÓGICA Y CLIMÁTICA

El análisis sobre los impactos en el trabajo de la crisis ecológica y climática global que estamos experimentando es un esfuerzo académico y político que debe afrontarse desde distintas aristas. Afortunadamente, ya contamos con un importante desarrollo de investigación, el cual permite discutir el fenómeno de forma más informada. En primer lugar, destacamos los movimientos sindicales que levantaron el término “transición justa” desde la década de los 70, apuntando a los efectos en la pérdida de empleos que las regulaciones ambientales estaban generando en las industrias química y energética (Steviss & Felli, 2014). El concepto ha sido utilizado desde entonces por parte de diversos grupos de trabajadores que ven peligrar su estabilidad laboral debido a la creciente preocupación ambiental. Su uso ha ido creciendo de manera paralela a la intensificación de la crisis climática, adquiriendo relevancia en negociaciones internacionales¹ y conflictos ambientales locales. En este contexto, es fundamental que las drásticas medidas que los órganos internacionales y la academia a través del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) han señalado como urgentes para evitar el colapso climático, se implementen teniendo en consideración el impacto considerable que tendrán en el mercado laboral global. Las propuestas planteadas generarán una transformación radical de nuestra matriz productiva y de los patrones de consumo a nivel global, las cuales eliminarán ciertos puestos de trabajo, potencialmente dejando a millones de trabajadores enfrentados a un alto riesgo. Es por ello, que los gobiernos y el sector privado deben considerar esta realidad e implementar medidas que aseguren una transición que no condene a la pobreza a las personas que verán transformada su situación laboral.

Por otra parte, los impactos de la crisis climática deben considerarse como riesgos potenciales relevantes para la pérdida de empleos, ya que el aumento de temperatura² y los eventos climáticos extremos, la subida del nivel del mar y el conjunto de diversos efectos del cambio climático son inevitables incluso si logramos realizar la transición lo antes posible.

1 De hecho, El Acuerdo de París lo incluyó en su preámbulo mediante el siguiente texto:

“Teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional,”

2 Un reciente estudio de la OIT señala que para 2030 un 2,2% de las horas laborales mundiales se perderán debido al aumento de temperaturas, cifra equivalente a la pérdida de la productividad de 80 millones de trabajadores. (ILO, 2019)

Frente a esta preocupante situación se levanta la atractiva idea de los “empleos verdes”, es decir, los nuevos puestos de trabajo que se crearán por las exigencias de la transición productiva anteriormente mencionada. En esta línea, un reciente estudio que observó el impacto económico de una transición carbono neutral energética y de transporte a nivel continental predice la creación de 35 millones de empleos hacia el año 2050 para el subcontinente latinoamericano (UNEP, 2019). Un análisis acabado de otros sectores, tales como la agricultura, el manejo de residuos, la construcción y los desafíos de la economía circular, nos pueden llevar a identificar potenciales de creación de empleo de amplia magnitud.

Para el caso chileno en particular, es posible graficar la situación de la potencial pérdida de empleos con el debate ocurrido durante el proceso de negociación del cierre de las centrales termoeléctricas a carbón que finalizó en 2019. Las conclusiones de este proceso llevaron al gobierno chileno a comprometerse a un poco ambicioso compromiso de cierre de la totalidad de ellas hacia el año 2040. En la mesa encargada de acompañar el proceso, la ONG Chile Sustentable fijó en aproximadamente 450 empleos directos los puestos de trabajo que se perderían, mientras las empresas aludían a una cifra cercana a los 1.500 trabajadores (Chile Sustentable, 2019). Lo anterior no obsta la necesaria consideración de los empleos indirectos que las industrias generan en la economía local y nacional. Sin lugar a dudas se requieren estudios más acabados por sector, pero el debate sobre la transición justa llegó para quedarse y el compromiso de carbono neutralidad asumido por el Estado chileno en el marco de la reciente COP 25 es fiel muestra de ello.

Las demandas levantadas por el movimiento sindical global en materia de transición justa han logrado la inclusión del concepto en el Acuerdo de París. Dentro de las demandas específicas de la agenda se incluye la necesidad de coordinar la transición a través de procesos de Diálogo Social multisectorial y especialmente las urgentes medidas de adaptación requeridas para los trabajadores que verán desaparecer sus fuentes de trabajo. Entre ellas cabe destacar la demanda de otorgar apoyo económico directo a los trabajadores, financiar procesos de capacitación y reconversión laboral e iniciar procesos de inversión pública y privada que permitan la creación de nuevas fuentes de empleo³.

3 Cabe mencionar que dos de las propuestas recientes de mayor desarrollo levantadas en torno al concepto de “Green New Deal” en EE.UU. (Bernie Sanders Green New Deal) y Europa (GNDE, 2019) incluían ambiciosas medidas en esta línea.

Referencias Bibliográficas

Banco Mundial (2017) Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019: La naturaleza cambiante del trabajo.

Benanav, A. (2019), Automation and the Future of work, *New Left Review*, No. 119.

Bernie Sanders Green New Deal (2019)

Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014) *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*.

Chile Sustentable (2017) Empleos asociados a las 28 Unidades Termoeléctricas a carbón que operan en Chile.

Ford, M. (2014) *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future*.

Fundación Chile (2017) *Automatización y Empleo en Chile, Reporte Final*.

ILO (2019) *Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work*.

Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018), "Automation, skills use and training", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 202.

PWC (2018) *Will robots really steal your jobs?*

Srnicek, N. (2016) *Platform Capitalism*.

Stavis, D. & Felli, R. (2014) *Global labour unions and just transition to a green economy, International Environmental Agreements*, 15.

GNDE (2019) *The Green New Deal for Europe, Blueprint for Europe's Just Transition*.

UNEP (2019) *Zero Carbon, Latin America and the Caribbean. The opportunity, cost and benefits of the coupled decarbonization of the power and transport sectors in Latin America and the Caribbean. Executive Summary*.

DESARROLLO DEL TALLER

Taller de discusión

El taller de debate se realizó el día 10 de junio y se inició con una presentación del informe de contexto a cargo del equipo de Nuestra América Verde. Posteriormente se discutió mediante una metodología de intervenciones abiertas de los participantes, mientras el equipo de NAVE recogió las propuestas planteadas mediante el uso de plataformas de visualización.

El debate se guió por las siguientes preguntas planteadas a los invitados:

1. **¿Qué oportunidades abre la transición ecológica para la generación de empleo en Chile? ¿Qué riesgos?**
2. **¿Qué puede hacer la sociedad frente a la precarización del empleo causada por las plataformas digitales?**
3. **¿Qué rol puede cumplir la Renta Básica Universal como mecanismo para adaptarse a los cambios que experimentamos en el mundo del trabajo?**
4. **¿Cómo podemos valorizar el trabajo no remunerado en nuestra sociedad?**

ASISTENCIA

Gabriela Cabaña	Socióloga, Estudiante PhD, London School of Economics
Aldo Madariaga	Académico ICSCO, UDP, Miembro de la Red para el Futuro del Trabajo
Giorgio Broccardo	Académico FACSO, U. de Chile, Investigador de Nodo XXI
Patricia Silva	Coordinadora del Programa de Trabajo del Instituto Igualdad
Alvaro Calix	Coordinador del grupo Transformación Social-Ecológica en América Latina, de la Fundación Friedrich Ebert
Eduardo Letelier Araya	Académico UCM, miembro Red Universitaria de Economía Social y Solidaria de Chile
Juan Corrales	Activista ambiental
Nolberto Díaz	Secretario General CUT
Eric Campos	Presidente Sindicato de Trabajadores de Metro
Germán Acevedo	Asesor Legislativo diputada Maite Orsini
Camila Carrasco	Profesional del Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica de Temuco
Christopher Gepp	Asesor Legislativo diputado Diego Ibañez
Cristobal Correa	Asesor Legislativo diputada Cristina Girardi
Jorge Leyton	Academico
Suina Chahuán	Asesora Legislativa diputado Giorgio Jackson
Javiera Martinez	Asesora Legislativa diputado Giorgio Jackson
Andrés Couble	Asesor Bancada RD
Rodrigo Echeopar	Coordinador General Nuestra América Verde
Pedro Glatz	Coordinador Contenido Nuestra América Verde

PRINCIPALES CONCLUSIONES

i) Los desafíos del trabajo se afrontan desde el presente de la relaciones laborales

Es muy relevante reconocer la situación actual del mundo del trabajo en Chile, así como los desafíos en materia de tasas de sindicalización, de negociación colectiva y la ausencia de una efectiva red de protección social universal en nuestro país. Cualquier proceso de reforma y adaptación a las nuevas realidades laborales que exige la automatización y la crisis ecológica y climática debe entenderse en ese marco.

ii) Género y trabajo

El movimiento feminista ha remecido las concepciones tradicionales de nuestra sociedad y las lecciones que se deben asumir en el mundo del trabajo son esenciales. En primer lugar cabe destacar la situación discriminatoria que sufren las mujeres en el mundo del trabajo, que se expresa en bajos salarios, menor participación en negociación sindical y menor participación en la fuerza laboral, entre otros. A esto se suma la necesidad de distinguir entre trabajo y empleo, con especial atención en el rol que las labores de cuidado juegan en esta clave distinción. En el marco de esta diferencia reconocemos la existencia de trabajos feminizados, tales como los referidos cuidados que son esenciales para el proceso de reproducción social. En ese marco, es esencial valorizar esos trabajos, debate en el cual la propuesta de renta básica universal pareciera ser una herramienta interesante a explorar en años venideros.

iii) Implicancias ambientales de la automatización

A pesar de un discurso hegemónico ligado al uso masivo de tecnologías en los procesos de producción y en el mercado del trabajo, el cual plantea como algo positivo para el medioambiente la supuesta “desmaterialización” de la economía, esta situación dista de ser real. Las demandas energéticas y de uso de recursos naturales por parte de la economía digital y la revolución industrial 4.0 son abrumadores y auguran un aumento en la frontera de explotación que puede ser terminal para la estabilidad del clima y los ecosistemas que ya se ven amenazados gravemente.

iv) Las múltiples dimensiones de la automatización

Es necesario profundizar el debate sobre este fenómeno, el cual tradicionalmente se centra de manera excluyente en la pérdida de empleos. En este sentido, es crucial apuntar a las transformaciones en materia de relaciones laborales, destacando la persistencia del vínculo de subordinación y dependencia, por lo que la reivindicación de que es una relación laboral debe ser prioridad, con todos sus efectos legales. Se experimentan importantes cambios en las dinámicas y la experiencia del trabajo para los empleados, lo que ha fortalecido los mecanismos de control, aumentando la presión y exigencia mediante sistemas de monitoreo y optimización de



alta complejidad. Finalmente este tipo de trabajo suma nuevas dificultades a la tarea de organización sindical, ya que atomiza la fuerza laboral y el lugar físico de trabajo colectivo pierde relevancia.

v) Contexto de COVID-19

La recesión económica causada por la pandemia del coronavirus exige medidas extraordinarias para generar una reactivación económica urgente. En ese sentido se proponen dos tipos de medidas. Las primeras apuntan a la transformación del rol del Estado, dejando de lado su papel neutral tanto ante la innovación y el desarrollo, como en la elección de sectores de la economía que puedan ser desarrollados mediante la decidida inversión estatal en áreas estratégicas. Asimismo, la inversión pública debe expresarse en un contundente programa de obras públicas. En segundo lugar se plantea la necesidad de innovar en la forma de creación de empleo y fomento a ciertas áreas de la economía. En ese sentido, ir contra el sentido de la automatización en labores como la conducción del metro por parte de personas o el fomento a la agroecología y la creación de circuitos cercanos de producción y consumo son elementos a considerar.

vi) Renta Básica Universal

Esta herramienta ha tomado especial relevancia en el contexto de la actual pandemia, debido tanto a la creación de políticas de apoyo mediante transferencias de emergencia, como también por la valorización de los cuidados que ha permitido el escenario de confinamiento. Una RBU, al ser una forma de acceder a un ingreso constante, redistribuyendo la riqueza, contribuye a mejorar diversos problemas sociales derivados de las desigualdades sociales.. Además de disminuir la pobreza, aumenta la seguridad económica y disminuye la precariedad, dos problemas crecientes en el mundo del trabajo. Por otra parte, puede jugar un rol para facilitar la transición justa de sectores económicos dañinos para el medio ambiente, quitando relevancia a la justificación de mantenerlos debido a la existencia de puestos de empleo vinculados a ellos.

WEBINAR

WEBINAR

¿Cómo sería una
Recuperación **Verde**
y **Latinoamericana**
que proteja
trabajadores?

LUNES 29/06
18h MEX | 19h CH |
20h ARG

EN VIVO por todos nuestros
canales: @n_americanverde



con **Álvaro Calix**, Coordinador
Programa Transformación
Social Ecológica de FES,
y **Gabriela Cabaña**, Socióloga
y parte de la Red Chile de
Ingreso Básico Universal



NUESTRA
AMÉRICA
VERDE

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

CAPÍTULO 2

¿Cómo financiaremos la Recuperación Verde Latinoamericana?

INTRODUCCIÓN

Analizando el financiamiento para la transición

A medida que el planeta ha ido tomando conciencia sobre la gravedad de la crisis climática y la necesidad de transitar rápidamente hacia un modelo de desarrollo sostenible, la acción decidida ha sido detenida por numerosas razones. Entre ellas cabe mencionar aquellas posturas que plantean el carácter disruptivo de los cambios requeridos, es decir, enfatizan las desventajas apelando a supuestas consideraciones de justicia social y bienestar de la mayoría de la población (Lamb et al. 2020). Estas afirmaciones se basan en simplificados análisis costo-beneficio (Nordhaus, 2018), que a nuestro juicio deben ser desechados por ignorar los beneficios de una transformación socio ecológica y por estar reñidos con consideraciones básicas de justicia social y ambiental. Plantear escenarios “óptimos” que implican un aumento de temperatura de más de 2°C sobre los niveles preindustriales tendría impactos insospechados sobre la estabilidad del clima y, por tanto, sobre el desarrollo humano. A la crítica moral y política sobre estos optimistas y poco realistas escenarios, se suma la constatación del escenario que augura el insatisfactorio estado de cumplimiento del Acuerdo de París, donde los compromisos climáticos de los estados son absolutamente insuficientes (UNEP, 2019A), incluso entre los países calificados como “progresistas” en la materia (Anderson et al., 2020).

Frente a este crítico escenario, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nivel de ambición le corresponde y cuán rápida debe ser la transición en Latinoamérica? Hasta hace unos años esta pregunta rondaba la mente de un grupo relativamente pequeño de académicos, ambientalistas y uno que otro político bienintencionado. Sin embargo, dos hitos particulares han remecido con fuerza el debate económico y realzado la necesidad de iniciar una agenda de inversión y transformación productiva y social de carácter “verde”. A continuación se propone una breve caracterización de las medidas a realizar, una proyección gruesa del monto requerido y los distintos instrumentos que pueden utilizarse para lograr recaudar ese nivel de recursos.

¿QUÉ HACER?

En primer lugar, la influencia del movimiento climático a nivel global ha aumentado considerablemente a partir de los sucesivos eventos climáticos extremos que han incidido en el surgimiento de un movimiento juvenil inédito liderado por la estudiante sueca Greta Thunberg. Este proceso ha permeado el debate político, iniciándose un nutrido debate a partir de las propuestas de los llamados “Green New Deals” (Aronoff et al. 2019; Pettifor, 2019; Santiago & Tejero, 2019, GNDE, 2019; Sanders, 2019; entre otros). Este debate se circunscribió inicialmente al Norte Global, pero en los últimos meses ha comenzado a aparecer fuertemente en la discusión pública de todo el planeta, así como a nivel latinoamericano y chilena. En segundo lugar, en el marco de la dramática recesión económica que ya estamos experimentando como consecuencia de la pandemia del COVID-19 una multitud de voces comienzan a demandar una recuperación verde.⁴

Más allá de los detalles específicos de cada propuesta, nos parece relevante para los fines de este documento enumerar brevemente el en materia de recursos que significa una agenda de este estilo.

4 Entre otras, cabe mencionar el “Acuerdo COVID por la Protección, la Reactivación y la Responsabilidad Fiscal”, “Reactivación Sostenible” (disponible en <https://www.reactivacionsostenible.cl/>) a nivel chileno y El “Pacto Ecosocial del Sur” (disponible en <https://pactoecosocialdelsur.com/>) y Nuestra América Verde (disponible en <https://www.nuestraamericaverde.org/>) en el ámbito regional. Además de llamados por parte del FMI (<https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-greening-the-recovery.ashx>) y de la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es) en el plano global.

Entonces, ¿qué hay que hacer? a modo de breve ilustración, la cual en ningún caso es exhaustiva y debe ser debatida en detalle en espacios académicos, políticos y sociales, las propuestas de reactivación verde diseñadas recientemente incluyen al menos las siguientes medidas:

- Descarbonización absoluta de las economías nacionales (medida que suele apuntarse a 2030 para países desarrollados y 2040 para los países emergentes).
- Electrificación de otros procesos energéticos que actualmente se sostienen en combustibles fósiles, tales como:
 - Transporte terrestre, aéreo y marítimo.
 - Sistemas de calefacción.
 - Maquinaria de uso industrial o agrícola.
 - Transición a sistemas agroalimentarios de baja huella de carbono e impacto ambiental
 - Construcción de viviendas sostenibles y reacondicionamiento térmico y energético en unidades existentes.
- Programas de reconversión laboral y apoyo económico a trabajadores pertenecientes a industrias que deberán cerrar.
- Inversión en sectores estratégicos y en investigación y desarrollo.
- Aumento de los recursos para la conservación de ecosistemas en peligro por la crisis climática y ecológica.
- Desarrollo de sistemas eficientes de reutilización y reciclaje de recursos a través de nuevos estándares de producción y cambios en patrones de consumo.
- Programas masivos de medidas para la adaptación y resiliencia frente a los efectos de la crisis climática. Dentro de ellos se incluyen cambios en administración y uso de bienes comunes naturales (agua, océanos, suelo); sistema de prevención y respuesta a aumento en eventos climáticos extremos y a cambio en condiciones del clima que demandarán transformaciones o movimiento geográfico de sectores económicos.
- Desarrollo de políticas de inversión multinacionales en múltiples áreas de infraestructura, conservación, provisión de servicios, entre otros.

¿CUÁNTO HAY QUE RECAUDAR?

Debido a lo amplia de la agenda a implementar y el carácter global de la doble crisis climática y económica, resulta necesario definir cuál es el marco de acción, así como la identificación de qué medidas se está hablando para cada caso particular. En la discusión que motiva este texto nos centraremos en el caso latinoamericano, con especial atención al chileno.

A nivel latinoamericano se ha comenzado a debatir los niveles de inversión requeridos para lograr la anhelada transición climática. Las magnitudes y ambición de ésta y la intensidad en mano de obra que demandan varias de las medidas planteadas, nos llevan a concluir que ellas cumplirían el estándar de ser una agenda de “recuperación verde” en el marco de la recesión económica causada por la presente pandemia. En primer lugar cabe mencionar un estudio de reciente publicación que modela la transición a carbono cero para 2050 para los sectores de generación eléctrica y transporte (UNEP, 2019B). En este reporte, se proyecta que a partir de la demanda energética proyectada; la comparación de los costos de mantener y crear nueva infraestructura fósil, en contraste con transitar una matriz eléctrica completamente renovable, arroja como resultado un ahorro de USD 283.000 millones. Para ello se requeriría una inversión regional de USD 800.000 millones en contraste a los USD 1,083 billones de mantenerse en la generación fósil. Por otra parte, el ahorro por rebajas de tarifas eléctricas sería de USD 222.700 millones hacia el año 2050. (Ibidem).

Este y otros informes demuestran que, para realizar una medición acertada de la rentabilidad social de esta transición, es necesario reconocer el papel que los activos bloqueados jugarán en la transición económica. Es esperable que la economía global transite de manera coordinada hacia una baja sustancial en la explotación y uso de combustibles fósiles, lo que causará un problema avaluado en USD 90.000 millones de activos bloqueados hacia el año 2050. (BID, 2019)

Al observar las otras áreas, el establecimiento de montos para las inversiones en transporte, reacondicionamiento térmico o transformaciones en los sistemas agroalimentarios dependen de muchos factores y la modelación a nivel regional se encuentra en un nivel menos avanzado. A pesar de esto, es posible adelantar que se requerirán inversiones cuantiosas. No obstante, una evaluación social acertada que considere los beneficios de salud de la población, las mejoras en su calidad de vida y la protección de ecosistemas reflejarán su innegable rentabilidad social.

Para el caso chileno se pueden presentar un par de modelaciones que demuestran las necesidades de recaudación que se levantan con la agenda de inversiones exigida. En primer lugar cabe mencionar que, en una materia tan urgente como el cierre de las centrales generadoras a base de carbón, un reciente estudio fijó en poco más de USD 18.000 millones⁵ el costo de la inversión en generación y transmisión para lograr su reemplazo por generadoras a base de energías renovables no convencionales hacia el año 2030 (KAS Ingeniería-Chile Sustentable, 2019). En segundo lugar, a partir de un reciente estudio publicado por la Asociación Gremial de Empresas Generadoras de Chile, la inversión requerida para su escenario de carbono neutralidad hacia 2050 en el escenario de referencia asciende a USD 71.291 millones (Energy to Business-Generadoras de Chile, 2020).

Mediante estas cifras que entregan cierta magnitud del alcance de las inversiones requeridas, cabe recordar que estamos hablando de un plan de transformación profundo que dure 10 años. Tal como el New Deal para enfrentar la Gran Depresión en EEUU no tenía una etiqueta de precio el primer día, nosotros estamos planteando una brújula que ayude a determinar el camino de un plan de recuperación y transformación socio ecológica.



- 5 Esto corresponde exclusivamente a las inversiones de capital requeridas. El mismo informe concluye que al sumar los costos de operación y transmisión de la mantención de las termoeléctricas o su reemplazo, esta última opción sin unidades a carbón resulta solamente USD 2.400 millones más cara.

¿CÓMO SE FINANCIA ESTA HOJA DE RUTA?

Esta ambiciosa agenda requerirá la implementación de nuevos mecanismos de recaudación a lo largo de la región. En esa línea se mencionan algunos posibles ámbitos de acción:

Impuesto a los super ricos: a partir del incesante aumento de la desigualdad, la idea de implementar un impuesto a la riqueza del sector más acomodado de las sociedades ha tomado cada vez más fuerza. Considerando que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta, condición que se hace más evidente al considerar nuevas metodologías de concentración de ingresos que reflejan de mejor manera los ingresos del 1% más acaudalado (CEPAL, 2019), se hace urgente considerar esta medida. En adición a esto, sabemos a través de diversas fuentes que los sectores más acaudalados son responsables en una proporción abrumadora de la crisis climática y ecológica, siendo el 10% más rico global responsable de entre un 25 y un 43% del impacto ambiental total (Wiedmann et al., 2020) y de un 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero (Chancel & Piketty, 2015). En ese sentido se podría implementar un impuesto anual a las grandes fortunas, donde se han planteado cifras como una tasa del 2% al patrimonio de quienes estén dentro del 1% más rico de la región.

Cooperación tributaria latinoamericana para coordinar políticas tributarias progresivas y efectivas: las políticas tributarias regionales se caracterizan por su heterogeneidad en las dimensiones de la recaudación. Sin embargo, es posible señalar que alcanzan un promedio de recaudación del 23.1% del PIB, lo que es proporcionalmente bajo si se compara con lo recaudado por los países de la OECD, que en promedio alcanzan un 34.3% (OECD et al., 2020). Asimismo ésta se logra principalmente a través de impuestos sobre bienes y servicios, caracterizados por su regresividad, los cuales constituyen más de la mitad de los ingresos tributarios. Esta cifra contrasta con los estados de la OECD, donde la proporción alcanza alrededor de un tercio. En contraste con ello, cerca de la mitad de la potencial recaudación del impuesto a la renta es evadida (Ibidem). Por todo lo anterior, considerando los potenciales flujos de capital que ocurrirían si un estado desarrolla de manera aislada un aumento de tributos progresivos, parece razonable avanzar hacia una política más agresiva de cooperación a nivel regional. Ésta puede incluir nuevas herramientas, tales como gravar las transacciones financieras, impuestos a transacciones digitales o tributos verdes.

Lucha contra paraísos fiscales: Actualmente el 40% de las utilidades mundiales se declaran en “paraísos fiscales”, amparados y tolerados por el Norte Global. América Latina pierde al menos USD 13.500 millones al año en impuestos no pagados por corporaciones que utilizan artilugios legales para aprovechar dichos territorios. Nuestra región no puede esperar y debe, proactivamente, ordenar una coalición de países del Sur Global que exija un marco regulatorio que erradique estas injusticias. (Zucman & Saez, 2020).

Rebaja del gasto militar: A pesar de que actualmente gastamos una proporción del PIB similar a la de principio de siglo en armamento, casi hemos triplicado el gasto en términos absolutos, alcanzando una cifra total de USD 64.184 millones (Banco Mundial, 2020). Considerando esto, ¿no es posible disminuir paulatina y coordinadamente este monto?

Impuestos verdes: estos tributos han ido tomando un rol cada vez más importante en la lucha contra la crisis climática. Debidamente aplicados, cumplen dos propósitos: desincentivar fiscalmente rubros económicos nocivos —como el auto individual, las energías sucias, los alimentos procesados que representen un riesgo para la salud, entre otros— y levantar recursos para financiar la transformación. El instrumento más relevante es sin dudas el impuesto al carbono. Nuevamente parece recomendable avanzar hacia un mecanismo de carácter regional, que disminuya los riesgos de pérdida de competitividad. Según un reciente estudio, un impuesto

regional de USD 30 (cifra cercana a la recomendada por el Informe del Banco Mundial en la materia; High-Level Commission on Carbon Prices & World Bank, 2017) por tonelada recaudaría USD 100.000 millones anuales en la región, y bastaría una proporción cercana a un tercio de ese monto para neutralizar los efectos regresivos a través de transferencias directas a la población (Vogt-Schilb. et al., 2019).

Moratoria de deuda: la crítica situación económica de la región causada por la pandemia del coronavirus, incidirá en un considerable aumento de la deuda pública. Considerando que únicamente el pago de los intereses de esta deuda son más del 40% de los gastos totales de las necesidades financieras de apoyo social en la crisis (ECONFIP, 2020), asoma como alternativa solicitar coordinadamente la suspensión de pagos por la duración de la crisis.

Articulación global Fondo Verde del Clima: A pesar de las declaraciones emitidas en ocasión de la aprobación del Acuerdo de París en la COP 21, donde se comprometieron 100.000 millones de dólares anuales desde 2020 hacia los países en desarrollo, la realidad dista mucho de una situación ideal. Esta meta se ha incumplido y los mecanismos utilizados por los países desarrollados han sido insuficientes, en especial el Fondo Verde del Clima. En los últimos años la diplomacia climática regional ha estado dividida, lo que le ha restado fuerza. Por eso, proponemos reiniciar una agenda conjunta de demanda de recursos al Norte Global, considerando su desproporcionada responsabilidad en materia climática. Esta ayuda podría realizarse a través de créditos blandos, transferencia de capital o tecnología.

Emisión de bonos verdes: una de las herramientas tradicionales para financiar deuda pública corresponde a la emisión de bonos. En esta línea existe ya cierta experiencia en materia de uso de este tipo de instrumento con el foco puesto en el fomento a la inversión en infraestructura verde. Parece razonable fomentar este ejercicio, tanto a nivel nacional como regional.

Banco Latinoamericano de Desarrollo Verde: puede considerarse la pertinencia de crear una institución de inversión y apoyo que promueva el desarrollo de polos económicos e industriales verdes que sean estratégicos para América Latina. A diferencia de las instituciones actualmente existentes, podría ser integrado únicamente por países de América Latina y las áreas estratégicas serían determinadas por criterios relacionados con la cooperación entre países, los sectores necesarios para la descarbonización de nuestras sociedades y la sostenibilidad dentro de una economía verde.

Referencias Bibliográficas

Anderson, K, Broderick, J. & Stoddard, I. (2020): A factor of two: how the mitigation plans of 'climate progressive' nations fall far short of Paris-compliant pathways, Climate Policy.

Aronoff, K., Battistoni, A., Aldana Cohen, D. & Riofrancos, T. (2019) A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal.

BID (2019) Cómo llegar a cero emisiones netas. Lecciones de América Latina y el Caribe.

Banco Mundial (2020) Gasto Militar (USD a precios actuales). Disponible en <https://datos.bancomundial.org>, Consultado el 02/07/2020.

High-Level Commission on Carbon Prices & World Bank, (2017) Report of the High-Level Commission on Carbon Prices.

Bernie Sanders Green New Deal (2019).

Chancel L. and Piketty T. (2015). Carbon and inequality: from Kyoto to Paris-Trends in the global inequality of carbon emissions (1998-2013), Paris School of Economics.

CEPAL (2019) Panorama Social de América Latina.

ECONFIP (2020) Born out of Necessity: A Debt Standstill for COVID-19.

Energy to Business-Generadoras de Chile (2020), Trayectoria del Sector Energía hacia la carbono neutralidad.

GNDE (2019) The Green New Deal for Europe, Blueprint for Europe's Just Transition.

KAS Ingeniería-Chile Sustentable (2019) Estudio prospectivo escenario de descarbonización eléctrica al 2030.

Lamb, W., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J., Capstick, S., Creutzig, F., Minx, J., Müller-Hansen, F., Culhane, T., Steinberger, J. (2020), Discourses of climate delay, Global Sustainability, 17.

Nordhaus, W. (2018) Projections and uncertainties about climate change in an era of minimal climate policies. American Economic Journal: Economic Policy, 10 (3), pp. 333-360.

UNEP (2019A) Emissions Gap Report.

UNEP (2019B) Zero Carbon, Latin America and the Caribbean. The opportunity, cost and benefits of the coupled decarbonization of the power and transport sectors in Latin America and the Caribbean. Executive Summary.

OECD et al. (2020), Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2020.

Pettifor, A. (2019) The Case for the Green New Deal.

Santiago, E. & Tejero, H. (2019) ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal.

Vogt-Schilb, A., Walsh, B., Feng, K. et al. (2019) Cash transfers for pro-poor carbon taxes in Latin America and the Caribbean. Nat Sustain 2, 941-948.

Wiedmann, T., Lenzen, M., KeyBer, L.T. et al. (2020) Scientists' warning on affluence. Nature Communications 11, 3107.

Zucman, E. & Saez, G. (2016). Missing Profits. 2016 update: Tables. Recuperado de: <https://missingprofits.world/>

DESARROLLO DEL TALLER

Taller de discusión

El taller de debate se realizó el día 22 de julio y se inició con una presentación del informe de contexto a cargo del experto en política tributaria Diego Riquelme. Posteriormente se discutió mediante una metodología de intervenciones abiertas de los participantes, mientras el equipo de NAVE recogió las propuestas planteadas mediante el uso de plataformas de visualización.

El debate se guió por las siguientes preguntas planteadas a los invitados:

- 1. ¿Cómo se financia una recuperación verde de manera progresiva?**
- 2. ¿Qué oportunidades abre la posibilidad de integración regional en cambiar dinámicas globales de tributación?**
- 3. ¿Cuáles son las medidas más probables de implementar en el corto plazo a nivel nacional o regional?**

ASISTENCIA

Diego Riquelme	Asesor Legislativo diputado Daniel Nuñez
Verónica Delgadillo	Senadora de México
Malena Tasat	Asesora diputada Gabriela Cerruti
Estefanía Fernandez	Asesora diputado Emiliano Yacobitti
Benjamín Leiva	Académico Universidad del Valle de Guatemala
Eduardo Letelier Araya	Académico UCM, miembro Red Universitaria de Economía Social y Solidaria de Chile
Luca Giambrotti	Miembro Observatorio de Políticas Públicas
Claudia Sanhueza	Académica Universidad Mayor
Maite Gambardella	Investigadora Centro de Regulación y Competencia, Facultad de Derecho U. de Chile
Ramón López	Académico FEN, U. de Chile
Julián Monkes	Miembro La vuelta al Mundo
Christopher Gepp	Asesor Legislativo diputado Diego Ibañez
Ezio Costa	Director Ejecutivo ONG FIMA
Alvaro Díaz	Economista y Académico
Jorge Canals	Abogado, director Medio Ambiente Chile 21
Javiera Martinez	Asesora Legislativa diputado Giorgio Jackson
Patricia Mercado	Senadora de México
Karin Berlien	Académica Universidad de Valparaíso
Guillermo Larraín	Académico FEN, Universidad de Chile
Cristóbal Otero	Economista, PhD (C) Universidad de Berkeley
Rodrigo Echeopar	Coordinador General Nuestra América Verde
Pedro Glatz	Coordinador Contenido
Isidora Alcalde	Comunicaciones Nuestra América Verde
Inti Bonomo	Integrante Equipo Nuestra América Verde

PRINCIPALES CONCLUSIONES

i) Mayor recaudación con instrumentos tradicionales

En todo el continente nos enfrentamos a una situación fiscal diversa, pero con un denominador común: una baja recaudación a partir de los mecanismos tradicionales utilizados a nivel comparado. Entre ellos se encuentra el hecho de que una baja proporción de los recursos es percibido a través de los impuestos personales y en particular del impuesto a la renta. Esto ocurre tanto por las bajas tasas existentes, como también por los problemas crónicos de evasión. Urge implementar un cambio en esta área, con el objeto de que el porcentaje de dinero ingresado por el fisco deje de concentrarse en los impuestos indirectos, que generan un conocido efecto regresivo.

Un segundo instrumento relevante para alcanzar mayor recaudación es la implementación de un royalty o regalía a la explotación de recursos naturales. En esta línea existe experiencia latinoamericana relevante que ha permitido un importante aumento en los presupuestos nacionales, lo que sumado a las conclusiones de recientes investigaciones, nos demostraría que es posible implementarlo en aquellos lugares donde no existe (como el caso chileno, donde existe un impuesto a las utilidades de la gran minería que recibe este nombre de manera incorrecta) y aumentar sus tasas en aquellos estados que ya lo aplican. Un aspecto crucial es reconocer la reconocida concentración de recursos naturales presentes en el continente, así como la histórica relación de explotación y despojo que hemos sufrido sin compensación debida. Finalmente un elemento a considerar es la extensión del royalty más allá de los recursos naturales tradicionalmente considerados como “no renovables”, que incluyen principalmente la minería metálica y los combustibles fósiles. Considerando los efectos de la extensión de las fronteras de acumulación contemporáneas, así como los consiguientes efectos en la estabilidad de los ecosistemas, parece recomendable revisar un trato distinto a bienes comunes naturales como el suelo y los océanos, los cuales a través de explotación agrícola, forestal, pesquera o acuicultura han visto dañada su condición de recurso “renovable”.

ii) La urgencia de la cooperación tributaria

Históricamente la región ha tenido importantes debilidades en el fortalecimiento institucional de su aparato estatal, espacio donde son de fundamental importancia los servicios de impuestos respectivos. La ausencia de recursos y atribuciones incide enormemente en las altas tasas de elusión y evasión tributaria.

A esto se suma un tema fundamental que ha tomado especial relevancia en los últimos años. Uno de los aspectos en el que la soberanía nacional de los estados se ha visto especialmente debilitada es la independencia para determinar la política tributaria. Este fenómeno se explica principalmente por las transformaciones que ha experimentado la economía global durante las últimas décadas, en particular la flexibilización del flujo de capitales. De esta manera, la facilidad con la que es posible transferir altas cantidades de recursos monetarios entre estados limita la

THE CLIMATE IS
CHANGING



SO SHOULD WE!

#ACTNOW

posibilidad de desarrollar de manera independiente una política tributaria agresiva que apunte a captar recursos de los sectores de más altos ingresos, produciéndose una verdadera “carrera hacia abajo” de países que optan por establecer políticas tributarias más débiles, con el objeto de atraer la inversión extranjera. A esta situación se suma la existencia de los llamados “paraísos fiscales”, lo cual hace aún más difícil gravar los más altos patrimonios.

Frente a esta situación, se propone como principal medida la instauración de una intensa agenda de cooperación tributaria regional, que permita el fortalecimiento de la recaudación nacional mediante herramientas como medidas de fiscalización y sanción más fuertes; establecimiento de tributos de forma conjunta (como impuesto a los altos patrimonios, impuestos verdes, entre otros) y establecer una política de tolerancia cero frente a los paraísos fiscales.

iii) Acción frente a las Industrias contaminantes: América Latina y el Caribe se caracterizan por permitir una agresiva explotación de recursos naturales y actividad industrial, productiva y de servicios que requiere un alto nivel de uso de recursos, energía y daño a los ecosistemas. Asimismo, muchas de estas industrias extractivas dañan prácticas económicas que datan de décadas y permiten asegurar bienestar a comunidades de la región. Por todo lo anterior, resulta imperioso el desarrollo de una política fiscal que se haga cargo de esta situación.

Por un lado, es menester fortalecer los impuestos a las actividades contaminantes, con el objetivo principal de desincentivar su desarrollo y, cuando sea necesario, apuntar a una transición de cierre de un sector en particular (el caso paradigmático es la explotación y uso de combustibles fósiles). En este aspecto observamos un abanico de medidas, tales como los impuestos al carbono; impuestos al valor agregado diferenciado que castigue actividades contaminantes; tasa por disposición de residuos en rellenos sanitarios; impuestos por cambio de uso de suelo; uso de plaguicidas y fertilizantes químicos; a la importación, venta o uso de combustibles fósiles, entre otros.

iii) Más allá de análisis costo beneficio simples, la necesidad de planificación verde

La región ha tenido una relación fluctuante con el rol que le ha entregado a la planificación en su historia reciente. Durante comienzos de la segunda mitad del siglo pasado ésta fue un principio fundamental en la regulación económica y en ella el Estado condujo la dirección de las actividades apuntando al desarrollo de una industria y mercados internos vigorosos. Todo lo anterior desde la teoría de la dependencia. Los límites de dicha tendencia y el agotamiento de sus principales medidas dio paso al auge de las políticas neoliberales, las cuales promovían la desregulación y el retroceso de la conducción estatal, dejando a las fuerzas de mercado nacionales e internacionales dirigir la actividad económica. Esto no significó un retiro absoluto del Estado, sino que una reconfiguración que desarrolló políticas de integración global, rebaja de aranceles y otorgamiento de derechos de explotación sobre bienes comunes a los privados. Asimismo, tomaron especial relevancia lógicas de administración provenientes de la economía, que se mantienen hasta el día como hegemónicas en la estimación del impacto social de las actividades económicas y regulatorias. Casi la totalidad del continente experimentó cambios en el rol del Estado durante el decenio que dio inicio a este siglo, donde los llamados “gobiernos

progresistas” retomaron el rol público , particularmente a través de la recuperación de rentas de recursos naturales.

Finalizado el ciclo progresista y en un escenario de crisis climática y sanitaria, es necesario construir un nuevo modelo de planificación económica que se haga cargo de la magnitud del desafío presente. De esta manera es urgente avanzar hacia una determinación de objetivos claros y agresivos en materia ambiental, para lo cual se requiere una complejización de los instrumentos de evaluación social y económica. Esto debe incluir al menos una revisión profunda de las distorsiones que afectan a los sectores fundamentales en la transiciones⁶, un apoyo decidido y ambicioso a la innovación en áreas sensibles y el desarrollo de políticas de cooperación subregionales con el objeto de desarrollar capacidades de implementación a mayor escala.

v) La necesaria legitimidad social a través de la participación y descentralización

El concepto “transición justa” surgió en Estados Unidos a partir de los procesos de movilización de trabajadores que veían como sus fuentes de trabajo eran cerradas por la implementación de estándares ambientales que desincentivan ciertos sectores. Desde entonces la demanda se ha complejizado y hoy encuentra un sinnúmero de expresiones y aristas. Entre ellas podemos encontrar la demanda por el desarrollo de sectores económicos que reemplacen a aquellos que deben desaparecer por la transición climática; la reparación a la población que sufrió los efectos de la contaminación de las industrias sucias; políticas de apoyo monetario y capacitación a las comunidades que se ven afectadas entre otros. A esta realidad debe sumarse la magnitud de los cambios requeridos por la transformación socioeconómica que necesitamos implementar. Se deben modificar sustancialmente patrones de consumo, prácticas laborales y referentes culturales, proceso que no estará exento de conflictos y problemas. Finalmente, consideraciones de justicia social demandan que la transición sea pagada especialmente por los sectores de altos ingresos, lo cual, la experiencia demuestra, es un proceso político no carente de complejidades.

Por estas razones es fundamental situar la legitimidad social como un valor orientador del proceso de transición justa. Sin el apoyo ciudadano no será posible desarrollar de manera sostenida y ambiciosa el apoyo a las comunidades inicialmente afectadas, los cambios sociales requeridos y la socialización de recursos necesaria para la agenda de inversión. En esa línea la participación ciudadana y la descentralización de la toma de decisiones cobra especial relevancia.

6 Para el caso chileno dos ejemplos importantes son el cobro de impuesto al carbono a las generadoras de electricidad a partir de energías renovables no convencionales y el impuesto diferenciado al diésel.

WEBINAR

WEBINAR

**Financiamiento
justo para una
recuperación
verde:**
impuestos progresivos,
fin a paraísos fiscales y
otras alternativas

MIÉRCOLES 19/8

16h30 COL | 17h30 CHL | 18h30 ARG

EN VIVO POR
YOUTUBE Y FACEBOOK:
[@nuestraamericaverde](#)



Juliana Londoño
Vélez
Profesora Economía UCLA
e Investigadora NBER



Susana Ruiz
Rodríguez
Coordinadora de Justicia
Tributaria para Oxfam
internacional



Ramón López
Profesor Economía
Universidad de Chile



Giorgio Jackson
Diputado y miembro
Comisión de Hacienda



NUESTRA
AMÉRICA
VERDE



CAPÍTULO 3

¿Cómo se transforman las ciudades en una Recuperación Verde?

INTRODUCCIÓN

La realidad de las ciudades en Latinoamérica, un panorama general

Desde el año 2007, el planeta acoge a más personas viviendo en ciudades que en territorios rurales por primera vez en toda la historia de la humanidad (UN Habitat, 2016). Asimismo, a finales de la década que comienza, este fenómeno dejará de ser un promedio global y pasará a ser una realidad en todas las regiones del mundo. La situación de América Latina se caracteriza por encontrarse en un estado avanzado de esta transición, alcanzando más de un 80% de población urbana, cifra que hacia 2040 alcanzará casi un 85%.

Las ciudades son el lugar donde se desarrollan las vidas de la mayoría de las personas de nuestro continente y por lo mismo, son el lugar donde la injusticia social imperante en él se vislumbra de forma más nítida. Durante las últimas décadas el crecimiento de la población urbana ha sido vertiginoso, del orden del 240% en el período 1970-2000 (CEPAL et al., 2016), causando una presión demográfica gigantesca. Junto a otros factores, como el aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza y los crónicos ciclos de inestabilidad económica de la región, han incidido en el desarrollo de numerosos problemas sociales que aquejan a nuestras urbes. El precio de la vivienda ha aumentado ostensiblemente, así como también ha disminuido la productividad y el tiempo libre para las personas que, fruto del crecimiento desregulado de las superficies urbanas, deben transitar largos recorridos dentro de la ciudad (Bouillon, 2012). El aumento de la violencia y la acción del crimen organizado hace crecer la sensación de inseguridad de la población, al mismo tiempo que los precios de los productos básicos y servicios se ven presionados al alza. En definitiva, nuestras ciudades requieren una agenda ambiciosa de políticas que las transformen hacia espacios justos y sostenibles. (CEPAL et al., 2016)

Por otra parte, se puede añadir a esta caracterización general una importante distinción relativa a la distribución de la población entre ciudades de distinta magnitud. Nuestra región presenta una importante concentración de habitantes en megaciudades (sobre 10 millones de personas), alcanzando un 14% de la población total, lo cual nos hace liderar esta cifra a nivel global (CEPAL et al., 2016). Asimismo, las 10 ciudades más grandes a nivel continental son responsables de un altísimo 27% del crecimiento del PIB (African Development Bank et al., 2019). Esta alta concentración de la riqueza no se condice con la calidad de vida de sus habitantes, los cuales son víctimas de las numerosas externalidades negativas que no ha sido posible solucionar, ya sea por las dimensiones de las ciudades y rápida expansión, como también por problemas de gobernanza y ausencia de financiamiento suficiente (Jordán et al., 2017). De forma paralela a esta realidad, en recientes años ha tomado relevancia el debate sobre las llamadas “ciudades emergentes o intermedias”, dentro de las cuales se consideran según una tipología del BID (Terraza et al., 2016) aquellas que acogen a menos de 2.000.000 de personas. Dichas urbes generan el 30% del PIB de la región y se espera que hacia 2025 esta cifra aumente hasta un 40%. Asimismo se está desarrollando un constante proceso de migración y crecimiento de estas ciudades, lo que permite predecir un sustantivo aumento de su población en el mediano plazo (Ibidem). Finalmente cabe mencionar que las ciudades de menor tamaño, es decir con una población menor a 300.000 habitantes, son menos importantes que en otras regiones al sumar un 40,8% de la población.⁷ (UN, 2015).

7

A modo de comparación, el mismo tipo de ciudades concentran el 58 y el 48% de la población en Europa y África respectivamente.

PROBLEMAS Y RIESGOS EN LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La planificación urbana

En primer lugar cabe mencionar la base de toda discusión relativa a las ciudades, la urgencia de afrontar los urgentes problemas de planificación urbana y territorial que sufre la población de las urbes del continente. El crecimiento horizontal de nuestras ciudades, sumado a la proliferación de proyectos aislados de alta densidad en el marco de un ordenamiento territorial de baja capacidad planificadora, ha producido un modelo de ciudad que puede designarse como ciudad com-fusa. Ésta se caracteriza por unir las características anteriormente mencionadas de existir simultáneamente áreas compactas y difusas. Este fenómeno ocurre, según esta corriente, por el funcionamiento de “dos lógicas de coordinación social: la del mercado y la del Estado; pero también de una tercera: la lógica de la necesidad” (Abramo, 2012). De esta manera, la dialéctica entre los dos actores tradicionales se ve acompañada de la acción individual y colectiva de las personas que ocupan y autoconstruyen asentamientos, generando una variante urbana característica y retos específicos para la región. En ese escenario se desarrolla una planificación con baja capacidad de mejorar las condiciones de vida, algunas de las cuales ya fueron mencionadas anteriormente. Cabe añadir a las ya referidas, los altos niveles de informalidad en la ocupación y propiedad de la tierra y la desigualdad en el acceso a fuentes de trabajo y servicios públicos. La carencia de espacios públicos de calidad es otro de los rasgos característicos de nuestras ciudades carentes de planificación eficiente .

El problema de la vivienda

Tal vez la crisis urbana más grave y cercana a las demandas populares corresponde a la situación del acceso a la vivienda digna y de calidad. La cifra exacta del déficit de vivienda es de compleja definición, pero es claro que, al menos, ha aumentado de un estimado de 38 millones de unidades en 1990 a cerca de 50 millones en 2012 (UN Habitat, 2012), esto ha ocurrido a pesar de grandes movilizaciones de iniciativas de pobladores exigiendo el derecho a la vivienda y políticas públicas que han intentado responder a esta demanda en todos los países. Entre las razones que explican la incapacidad de los esfuerzos estatales para entregar vivienda de calidad a la totalidad de la población de sus países, se encuentra la magnitud del desafío relativo al ya mencionado crecimiento demográfico y la migración hacia las ciudades. A esto se añade la hegemonía de las soluciones de mercado a nivel de política habitacional y su nocivo efecto al incentivar la segregación social. Por otra parte, este excesivo foco en políticas neoliberales ha propiciado la especulación inmobiliaria, lo que ha aumentado el precio de los suelos urbanos y consecuentemente ha encarecido la provisión de vivienda social. Finalmente es importante relevar la crisis de la población viviendo en asentamientos informales, la cual asciende a la escalofriante cifra de al menos 100 millones de personas (CEPALSTAT,2019), es decir, una cifra cercana al 20% de los habitantes de ciudades reside en una vivienda de precarias condiciones (Cuervo & Délano. 2019)

El deterioro ambiental

A estos problemas endémicos de nuestras urbes es necesario añadir las urgentes problemáticas ambientales, que han pasado de ser un tema menor a encontrarse dentro de las principales prioridades para las discusiones urbanas. Esto redundará en un sinnúmero de perjuicios para las personas, incentiva la emisión de gases de efecto invernadero y dificulta la adaptación al cambio climático. Por ello debe afrontarse de forma prioritaria desde dos perspectivas. La primera dice relación con la urgente necesidad de disminuir la huella ambiental que producen los asentamientos urbanos, los cuales para satisfacer los recursos de su población poseen un verdadero metabolismo urbano, concepto que pueden resumirse como “la suma total de los procesos técnicos y socioeconómicos que ocurren en las ciudades, los cuales tienen por resultado crecimiento, producción de energía y eliminación de residuos” (Song et al, 2019). Dentro de este metabolismo es posible considerar el consumo energético, donde las ciudades consumen el 78% de la energía global y son responsables de la emisión del 60% de los gases de efecto invernadero América Latina (UN Habitat, 2016). Por otra parte, en materia de residuos en Latinoamérica se producen 541.000 toneladas de residuos urbanos al día, de los cuales únicamente el 10% es valorizado de alguna forma, existiendo gran disparidad entre la realidad de cada país. El 27% de los residuos se destinan a basurales, quemados u otras prácticas inadecuadas, y aún 40 millones de personas carecen de servicio de recolección de residuos (ONU Medio Ambiente, 2018). El reciclaje formal apenas alcanza el 2% del total de la región, y el reciclaje total llega hasta el 4% (Hettiarachchi et al. 2018). Este sector de desechos es responsable de alrededor del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región (CEPAL, 2018). Finalmente señalar que actualmente, el 32% de los viajes diarios en ciudades en nuestro continente se realizan en transporte individual, vehículos que son responsables del 66% del consumo energético y el 75% de las emisiones de CO₂ en transporte (Vasconcelos, 2019).

La segunda dimensión que es necesario observar desde el prisma estrictamente ambiental corresponde al efecto que el deterioro ecológico tiene en la calidad de vida de las personas, tanto de forma inmediata como a mediano plazo. Dentro de los primeros se encuentra la contaminación atmosférica, donde sabemos que en Latinoamérica al menos 100 millones de personas viven en ciudades que tienen niveles de contaminación atmosférica superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (Clean Air Institute, 2016). Por otra parte los efectos que el cambio climático tendrá sobre las poblaciones urbanas son de diversa índole y gravedad. Entre ellos cabe mencionar la pérdida de empleos por industrias que se verán afectadas o la creación de islas de calor en los centros urbanos, lugares donde el aumento de temperatura será sustancial y afectará principalmente a los sectores más pobres de las urbes. Pero tal vez el efecto más importante será el aumento de la vulnerabilidad de millones de familias que verán afectados sus entornos por eventos climáticos extremos o el aumento del nivel del mar, lo que exigirá medidas de adaptación a esta nueva realidad (CEPAL et al., 2016).

A modo de conclusión de esta breve caracterización del estado de las ciudades en la región no es posible ignorar dos fenómenos que, de distinta forma, son fundamentales para pensar los desafíos en el área a futuro. En primer lugar, la presión de los procesos migratorios dentro de los países y de carácter internacional. Este fenómeno ha experimentado un sostenido incremento en los últimos años a nivel global y a nivel regional no hemos sido la excepción. La inestabilidad económica y política y los primeros efectos de la crisis climática (dos fenómenos que sin lugar a dudas se retroalimentan entre sí) son las principales causas que explican este fenómeno y se predice un aumento de intensidad de ambos (Lejtregger, 2019). Finalmente el agresivo rol que el capital financiero juega a nivel global y regional en el desarrollo urbano es una variable que debe considerarse como un problema de fundamental importancia, considerando los efectos que ya ha causado y el probable aumento de su relevancia (Rolnik, 2017).

LA REACTIVACIÓN SOSTENIBLE Y LA AGENDA REGIONAL URBANA

La necesaria transición hacia ciudades sostenibles y resilientes ha experimentado una nutrida y fructífera discusión a nivel global y continental en años recientes. A partir de la realización de la Tercera Conferencia ONU-Hábitat el año 2016 en Quito, la comunidad internacional aprobó la Nueva Agenda Urbana (NAU), documento base de orientación para este proceso. En medio de la implementación de este plan, dos fenómenos de alto impacto se han desarrollado de forma simultánea, los cuales sin duda influirán en la puesta en práctica de las recomendaciones incluidas en la NAU. Por una parte, a pesar de que la agenda incluye un relevante papel de la crisis climática, la fuerza que ha alcanzado la toma de conciencia global debe fortalecer su rol. Esto se refleja tanto en las inequívocas señales de insuficiencia de las medidas de mitigación (IPCC, 2018; UNEP 2019) y adaptación (Global Commission on Adaptation, 2019) como en el aumento de influencia del movimiento climático a nivel global. La atención pública ha aumentado a partir de los sucesivos eventos climáticos extremos que han incidido en el surgimiento de un movimiento juvenil inédito liderado por la estudiante sueca Greta Thunberg. En segundo lugar, cabe mencionar los graves efectos que la dramática recesión económica tendrá sobre la economía global que ya estamos experimentando como consecuencia de la pandemia del COVID-19.⁸ Estos dos elementos deben influir en la rapidez de implementación de la NAU, pero ¿en qué situación y a través de qué instituciones se está realizando este proceso?

Latinoamérica y el Caribe ha tomado la iniciativa en el desarrollo de un plan regional para implementación de la Agenda, desarrollando numerosos procesos en esta línea, alojados en el Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI), CEPAL y sus instancias de coordinación continental. Esto se ha plasmado en el Plan de Acción Regional (PAR) para la implementación de la Nueva Agenda Urbana (CEPAL, 2018b), un ambicioso documento con principios⁹ y ejes de acción definidos.¹⁰ Asimismo el desarrollo de iniciativas como una Plataforma conjunta Urbana y de Ciudades de la región, el cual es será un “instrumento para facilitar el seguimiento y monitoreo del desarrollo urbano en la región propuesta de plataforma y para promover el fortalecimiento de capacidad y el intercambio de experiencias y prácticas entre pares” (CEPAL, 2018c) son una gran noticia para la agresividad requerida con miras a la puesta en práctica de la propuesta de la NAU. El proceso de implementación ha sido irregular hasta ahora en la región, (Ciudad Sostenible, 2019) pudiendo mencionar como hitos relevantes el desarrollo de Políticas Nacionales Urbanas de Nueva Generación (como por ejemplo Argentina y Bolivia), revisiones nacionales de la regulación urbana (como son los casos de México y Ecuador) o adaptaciones del marco de inversiones en el territorio (proceso iniciado en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana apoyados por el Banco Centroamericano de Integración Económica).

Una arista que no podemos olvidar es la implementación del PAR en cada una de las ciudades del continente, ya que este proceso es tanto o más importante que la definición y realización de políticas a nivel internacional y nacional. En ese sentido hay varias experiencias positivas de ciudades que han iniciado la creación de planes para aplicar la nueva agenda urbana a nivel local (Ej: Querétaro, Mérida, San Salvador, San José, Santo Domingo, Cuenca, entre otros, Ciudad Sostenible, 2019)

En este aspecto del PAR resta mucho trabajo por delante, el cual debe hacerse cargo de la diversidad de los alrededor de 18.000 municipios de la región, para lo cual será fundamental fortalecer las instancias de cooperación y coordinación entre ciudades. El trabajo realizado por la iniciativa de Ciudades Emergentes del BID (Terraza et al, 2016) o el espacio generado en el proyecto de integración MERCOCIUDADES pueden ser instancias a explorar para ampliar o fortalecer.



- 8 Según un reciente reporte de CEPAL, la recesión para el año 2020 en la región será de un 9,1%. (CEPAL, 2020).
- 9 Los principios son: Ciudades Inclusivas; Economías urbanas sostenibles e inclusivas; Sostenibilidad ambiental urbana y Gobernanza Efectiva y Democrática.
- 10 Los ejes son: Políticas Nacionales y Urbanas; Marcos legales urbanos; Planificación urbana y territorial; Economía Urbana y Finanzas Municipales; Implementación local y Mecanismos de Reporte.



¿QUÉ MEDIDAS PARA LAS CIUDADES EN LA RECUPERACIÓN VERDE?

- Planificación urbana con miras a generar ciudades ecológicas, justas e igualitarias.
- Fomento al transporte público en detrimento de la movilidad privada a través de medios motorizados de baja huella de carbono (buses eléctricos, trenes de cercanía y subterráneos)¹¹. El documento de Hoja de Ruta de Nuestra América Verde propone implementar transporte público gratuito en la totalidad de las ciudades sobre 200.000 habitantes de la región hacia el año 2030.
- Desarrollo de una agenda de promoción de la movilidad no motorizada, con inversión en infraestructura para bicicletas y peatones.
- Electrificación de otros procesos energéticos que actualmente se sostienen en combustibles fósiles dentro de las ciudades:
- Maquinaria de construcción
- Sistemas de calefacción
- Construcción de viviendas sostenibles y reacondicionamiento térmico y energético en unidades existentes.
- Transición a sistemas agroalimentarios de baja huella de carbono e impacto ambiental
- Aumento de los recursos para la conservación y regeneración de ecosistemas en peligro por la crisis climática y ecológica que se encuentren dentro de los límites urbanos.
- Desarrollo de sistemas eficientes de reutilización y reciclaje de recursos a través de nuevos estándares de producción y cambios en patrones de consumo.
- Programas masivos de medidas para la adaptación y resiliencia frente a los efectos de la crisis climática dentro de las ciudades. Dentro de ellos se incluyen cambios en administración y uso de bienes comunes naturales (agua, océanos, suelo); sistema de prevención y respuesta a aumento en eventos climáticos extremos y a cambio en condiciones del clima que demandarán transformaciones o movimiento geográfico de sectores económicos.
- Desarrollo de políticas de inversión multinacionales en múltiples áreas.
- Explorar nuevos modelos de habitar la ciudad que disminuyan nuestra carga ambiental y conductas que inciden en ella. En esa línea, es posible incentivar la vivienda colaborativa y formas de uso de la vivienda que no descansen de forma exclusiva en la propiedad privada.

11 Cabe mencionar que sumado a los ya mencionados efectos de la contaminación atmosférica en la salud de las personas, un reciente estudio valorizó los beneficios de una transición total a transporte eléctrico en la región, cifrada en USD 30.000 millones (UNEP, 2019)

Referencias Bibliográficas

Abramo, P. (2012) La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas. *Eure* vol 38, N° 114.

African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank (2019) *Creating livable cities: regional perspectives*.

BID (2019) *Cómo llegar a cero emisiones netas. Lecciones de América Latina y el Caribe*.

Bouillon, C. (2012) *Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe*, BID.

CEPAL (2018) *La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: una visión gráfica*.

CEPAL (2018b) *Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 2016-2036*.

CEPAL (2018c) *Propuesta de Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe*.

CEPAL (2020) *Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Informe Especial COVID-19 N° 5*.

CEPAL-ONU Habitat-MINURVI (2016) *América Latina y el Caribe. Desafíos, dilemas y compromisos de una agenda urbana común*.

CEPALSTAT (2019). Disponible en <https://estadisticas.cepal.org>. Consultado el 04/08/2020.

Ciudad Sostenible (2019), *Implementación de la Nueva Agenda Urbana en Latinoamérica*, Disponible en <https://www.ciudadostenible.eu/miradas-urbanas/urbanamerica/implementacion-de-la-nueva-agenda-urbana-en-latinoamerica/>. Consultado el 04/08/2020.

Cuervo, L. y Délano, M. (eds.) (2019) *Planificación multiescalar: las desigualdades territoriales. Volumen II*, serie Seminarios y Conferencias, N° 92, CEPAL.

Global Commission on Adaptation (2019) *Adapt Now: A Global call for Leadership on Climate Resilience*.

Hettiarachchi, H, Ryu, Shoyeon, Caucci, & Silva, R. (2018). *Municipal Solid Waste Management in Latin America and the Caribbean: Issues and Potential Solutions from the Governance Perspective*. *Recycling* 3, 19.

IPCC (2018). Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.

Jordán, R., Riffo, L. & Prado, A. (2017) Desarrollo Sostenible, Urbanización y Desigualdad en América Latina y el Caribe, CEPAL.

Lejtregger, R. (2019) La movilidad humana en la agenda climática de las Américas. Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

ONU Medio Ambiente (2018). Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe.

Rolnik, R. (2017). La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas.

Song, Y., van Timmeren, A. & Wandl, A. (2019) A literature review and categorisation of sustainability aimed urban metabolism indicators: a context, indicator, mechanism, outcome analysis. Regional Statistics, Vol. 9. No. 1.

UN (2015) World Population Prospects The 2015 Revision Key Findings and Advance Tables

UNEP (2019) Emissions Gap Report.

UNEP (2019B) Zero Carbon, Latin America and the Caribbean. The opportunity, cost and benefits of the coupled decarbonization of the power and transport sectors in Latin America and the Caribbean. Executive Summary.

UN Habitat (2016) World Cities Report 2016. Urbanization and Development: Emerging futures.

Terraza, H., Rubio Blanco, D. & Vera, F. (2016) De ciudades emergentes a ciudades sostenibles, BID.

DESARROLLO DEL TALLER

Taller de discusión

El taller de debate se realizó el día 22 de agosto y se inició con una presentación del informe de contexto a cargo del equipo de Nuestra América Verde. Posteriormente se discutió mediante una metodología de intervenciones abiertas de los participantes, mientras el equipo de NAVE recogió las propuestas planteadas mediante el uso de plataformas de visualización.

El debate se guió por las siguientes preguntas planteadas a los invitados:

1. ¿Cómo implementar la Nueva Agenda Urbana en la región en el contexto de crisis climática y recuperación verde?
2. ¿Es factible avanzar a medidas radicales como el transporte público gratuito o la construcción masiva de viviendas urbanas sostenibles en 10 años?
3. ¿Qué elementos centrales no pueden estar ausentes en una reactivación sostenible desde las ciudades?

ASISTENCIA

Nicolás Valenzuela	Investigador Universidad Católica
Lake Sagaris	Académica Ingeniería UC, Directora del Laboratorio de Cambio Social
Andrea Urbina	Arquitecta y Planificadora Urbana, Profesional Asesoría Urbana Municipio de Renca
Valentina Saavedra	Académica FAU, U. de Chile
Javier Vergara	Director Ejecutivo Ciudad Emergente
Tomás Gárate	Jefe de programas de conservación Fundación Legado Chile
Rodrigo Echeopar	Coordinador General Nuestra América Verde
Pedro Glatz	Coordinador Contenido Nuestra América Verde
Isidora Alcalde	Comunicaciones Nuestra América Verde

PRINCIPALES CONCLUSIONES

i) Disputa por la ciudad

Se planteó la necesidad urgente de construir un clivaje más agresivo sobre la construcción de ciudades equitativas, justas y sostenibles. En ese sentido se caracterizó de forma clara la disputa entre el gran capital nacional e internacional y el rol que la inversión inmobiliaria y en infraestructura urbana tiene en los flujos de capital nacionales, regionales y globales. En ese sentido, se discutió acerca de la gran oportunidad que tiene el movimiento por la justicia ambiental de enlazar sus demandas tradicionales junto a las levantadas por los movimientos de pobladores, activistas y organizaciones que trabajan por el derecho a la ciudad.

Asimismo, se identificaron otros ejes de conflicto en las urbes. Entre ellos cabe mencionar, el uso y administración del espacio público y la disputa por la infraestructura vial entre movilidad motorizada y no motorizada. Finalmente se destacó la relevancia de la movilización social a favor del fomento al transporte público y la importancia histórica que su desarrollo ha tenido para Chile, incluyendo movilizaciones históricas relacionadas a alzas en el pasaje.

ii) Financiarización

Relacionado con el punto anterior, se destacó la importancia que el proceso de financiarización de la economía global ha tenido sobre el desarrollo urbano en la región. En ese sentido, se observa una dinámica de movilidad extrema del capital, que incide en la depresión o auge de centros urbanos. Del mismo modo, se desencadenan procesos de expulsión de comunidades dentro de las ciudades, fenómeno que los estados toleran e incluso fomentan, debido al crecientemente importante papel que el desarrollo urbano juega en las economías nacionales.

iii) Planificación participativa

Se recaló la urgente necesidad de abrir espacios de planificación urbana participativa. La región cuenta con una riquísima historia de organización y movilización en torno al derecho a la vivienda y la ciudad, por lo que una agenda de transformación verde debe construirse desde el territorio y por los pobladores.

iv) La ciudad sustentable es feminista

En el contexto de la nueva ola feminista, es necesario teñir la transición ecológica de un tinte feminista. Las ciudades deben diseñarse y convertirse en espacios que privilegien el trabajo de cuidados equitativamente distribuido por género y que aseguren seguridad a todos sus habitantes frente a la violencia, el acoso y el abuso.

WEBINAR

CONVERSATORIO

**Transición a
ciudades
sostenibles:**
desafíos urbanos de una
recuperación verde



Mariana Alegre
Director Lima Cómo
Vamos
Profesora PUCP



Maite Rodríguez
Red Mujer y Habitat



Lake Sagaris
CEDEUS UC



Alfonso de Urresti
Senador y Presidente Comisión
Medio Ambiente

LUNES 21/9
15H PER/COL/ECU | 17h CHL/ARG/UY

EN VIVO POR
YOUTUBE Y FACEBOOK:
[@nuestraamericaverde](#)



CAPÍTULO 4

Transformar nuestros sistemas alimentarios para la transición ecológica

INTRODUCCIÓN

Panorama general de los sistemas alimentarios en la región

Los temas agrarios han tenido un papel destacado en el análisis socioeconómico y político en la región, así como en los estudios sobre el desarrollo. Reconociendo el rol fundamental que tienen la producción de alimentos y el territorio en que ésta se realiza, la propuesta de NAVE busca situarse dentro de las visiones que consideran este proceso dentro de un esquema de mayor complejidad. Por ello, este análisis se basa en el concepto base de sistemas alimentarios. Éstos son generalmente definidos como la red de actores y actividades que interactúan entre sí, dentro de un ambiente ecológico, social, cultural y económico produciendo, procesando, distribuyendo, consumiendo y gestionando los residuos de los alimentos. Los sistemas agroalimentarios también incluyen las condiciones estructurales, como regulaciones, estándares y políticas vigentes. Por otra parte, su rendimiento se evalúa a partir de tres objetivos generales: la provisión de seguridad alimentaria y nutricional, la seguridad ambiental y el bienestar social que proveen (Gaitán-Cremaschi et al., 2019). A pesar de ello, el documento se enfocará primordialmente en el sector productivo, debido a la mayor disponibilidad de datos, investigación y propuestas a nivel continental. Sin embargo, es una asignatura pendiente para NAVE ampliar el análisis de manera que las políticas impulsadas consideren los sistemas alimentarios en su total complejidad.

HISTORIA Y DESARROLLO

La agricultura y la producción de alimentos han jugado históricamente un rol fundamental en nuestro continente. Desde el surgimiento de los estados nacionales a comienzos del siglo XIX, este sector de la economía ha sido un aspecto fundamental de la realidad socioeconómica de la región. Durante gran parte de nuestra historia como naciones independientes ha empleado a la mayor parte de la fuerza laboral de Latinoamérica y los territorios rurales acogieron a la generalidad de la población. Las formas de propiedad y técnicas de explotación fueron transformándose a medida que transcurrieron las décadas, sin embargo se produjo la instauración de un sistema con características mixtas. Éste incluía prácticas capitalistas enfocadas en la exportación, que se inscriben dentro de lo que se ha conocido como el “Primer Régimen Alimentario” (Friedman & McMichael, 1989); a la vez que continuaban existiendo formas de producción y relaciones laborales tradicionales (Kay & Vergara-Camus, 2018). Este primer régimen comenzó a verse debilitado con la crisis económica de 1929, que golpeó de manera agresiva el mercado internacional, limitando el acceso a mercados globales para la producción de alimentos. Un par de décadas de inestabilidad y reordenamiento político y económico internacional culminó con la nueva institucionalidad planetaria post Segunda Guerra Mundial.

En este momento se inaugura el “Segundo Régimen Alimentario”, donde los países desarrollados intentaron retomar el control de la producción y los sistemas alimentarios en su conjunto. Se reconocieron los límites del mercado para garantizar el suministro de alimentos y la liberalización del comercio internacional se vio limitada en este sector. Las estrategias de desarrollo iniciadas en América Latina, guiadas por los criterios de la CEPAL y la teoría de la dependencia (Svampa, 2016), tuvieron como efecto indirecto la disminución de la participación del sector agrícola en los mercados globales. Paralelamente se desarrollaron dos fenómenos esenciales para comprender la situación actual. Por una parte, (Otero, 2008; Patel, 2013) comenzamos a ver la implementación de la llamada “Revolución Verde” y la masiva adopción de avances tecnológicos como variedades de mayor producción y uso de pesticidas y fertilizantes artificiales. Por otra parte, se desarrollaron los procesos de movilización campesina y reforma agraria que cambiaron radicalmente la estructura productiva y social rural. Si bien la evaluación de dicho proceso ha sido tema de intenso debate, si es posible concluir que uno de sus efectos principales fue el fin del sistema tradicional de producción basado en la Hacienda (Kay, 1999).

Finalmente llegamos al proceso de neoliberalización de la economía y el sistema alimentario alrededor del mundo, el cual delinea de manera general la situación imperante en nuestra región. En este sector esta corriente se expresó principalmente en la reapertura al mercado internacional, el fortalecimiento de los derechos de propiedad, reducción de los subsidios agrícolas y una paulatina concentración de la propiedad. Esta dinámica ha influido en la reprimarización de la economía regional y la disminución del papel que el campesinado tradicional cumple en el sistema. Por una parte, este sector ha aumentado sus relaciones laborales formales (proletarización), mientras a la vez, la adopción de tecnología ha reducido la demanda de mano de obra, fortaleciendo la ya extendida migración hacia los centros urbanos. (Kay & Vergara Camus, 2018)). Este mismo elemento ha permitido la mercantilización del patrimonio biológico de todo el continente. Sin embargo, el elemento que mejor caracteriza las últimas décadas de desarrollo de los sistemas alimentarios en América Latina corresponde al auge del agronegocio.

UNA MIRADA A LA SITUACIÓN ACTUAL

El sector agrícola representa alrededor de un 5% del PIB de la región, cifra que varía de manera importante entre países (alcanzando más del 10% del producto en casos como Bolivia, Haití o Ecuador). Alrededor del 14% de la fuerza laboral está empleada en esta área y la pobreza se concentra de manera más predominante en las áreas rurales, duplicando el promedio urbano (FAO, 2018). Indudablemente esta realidad se explica a través del auge exportador que ha experimentado el continente. Es así como, las cifras han aumentado desde representar 8,3% de las exportaciones agroalimentarias mundiales en 1990, hasta alcanzar un 13,8% en 2015 (OECD-FAO, 2019).

La concentración de la propiedad es un rasgo que ha caracterizado al sector a lo largo de su historia y hoy esa situación sigue vigente. De las 20 millones de fincas, el 81% son pequeños productores familiares, que ocupan el 23,4% de la tierra. En el cúspide de la pirámide, el 18,7% de las unidades productivas más grandes representan un 76,6% del suelo agrícola. (OECD-FAO, 2019). Por su parte, al medir el GINI aplicado a la distribución de la tierra, la región llega a 0,79, superando ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55). (OXFAM, 2016)

Latinoamérica y el Caribe lideran la exportación de varios productos a nivel global, tales como leguminosas, trigo, maíz, azúcar, soya, y diversas frutas y vegetales (bananas, arándanos, entre otras) (FAO, 2019). Asimismo, la producción ganadera ha tomado un rol de similares proporciones. En el caso de la carne bovina, LAC cubre aproximadamente el 30% del comercio mundial, con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia como los principales exportadores (80% del total) (Pezo, 2019). Por su parte, si consideramos el área productiva, la cifra alcanza una cuarta parte del intercambio vacuno y una quinta parte de las aves (CEPAL-FAO, 2017).

El sistema alimentario ha sufrido transformaciones fundamentales en los últimos. Inicialmente la ola neoliberalizadora fue la que impulsó estos cambios durante los años 90, sin embargo esa ruta fue de alguna manera sostenida por los gobiernos progresistas de principios de siglo. Esta dinámica corresponde a la ya mencionada apertura a los mercados internacionales con la consiguiente concentración de la producción y el surgimiento del llamado agronegocio, que se sostuvo en el auge de los precios de los commodities y exportaciones de productos no tradicionales. Este proceso se ha mantenido a lo largo del tiempo y ha producido una verdadera situación de tolerancia y tácita aceptación desde la política de la dinámica crecientemente concentradora del sector (Kay & Vergara-Camus, 2018), a pesar de sus efectos negativos en materia social y ambiental. Los primeros apuntan a que si bien el sector genera oportunidades de empleo formal, las cadenas de valor desarrolladas por las empresas insertas en el capitalismo global constituyen cadenas de valor de alta complejidad, dificultando el trabajo de los pequeños agricultores. Éstos se enfrentan a crecientes problemas para acceder al financiamiento, a mercados y transporte, como consecuencia de la liberalización del sector y la disminución del gasto público. Paralelamente, la búsqueda de insertar al total de la producción en las cadenas comerciales internacionales exigen la implementación de normativas de calidad, trazabilidad y certificación, a los cuales la agricultura familiar campesina y los pequeños productores no pueden acceder (Intini et al., 2019).

Finalmente cabe mencionar que esta dinámica tiene altas expectativas de mantener su trayectoria ascendente, ya que la región ha experimentado la expansión agrícola más intensa en las últimas dos décadas, principalmente a través de la destrucción de la selva amazónica. Al mismo tiempo, América Latina posee el área potencial de expansión productiva más importante del mundo (Rocha et al., 2019).

La agricultura industrial y extensiva ha aumentado considerablemente su huella ambiental, incluyendo el profuso uso de agroquímicos, la degradación de los suelos, la pérdida de diversidad en especies alimenticias, el gigantesco consumo hídrico exigido y, especialmente, las emisiones de GEI. La agricultura es el sector que aporta la mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la región, ya que incluyendo el cambio de uso de suelo representa cerca del 50% de las emisiones (Vergara et. al, 2015). Si a esto sumamos el papel que juega el transporte, distribución y manejo de residuos, la huella ambiental alcanza proporciones gigantescas en nuestra región.

A esto debe sumarse la creciente pérdida de biodiversidad latinoamericana, empujada fundamentalmente por el crecimiento de la frontera de extracción y producción agropecuaria. Todo lo anterior justifica una transformación radical del sistema alimentario en pos de desarrollar uno de mayor sostenibilidad multidimensional.

Paralelamente al sostenido crecimiento de nuestra industria, la región vive una doble crisis de inseguridad alimentaria (que alcanzó a 34 millones de personas en 2017 [FAO, 2018]) y obesidad (que alcanza al 30% de la población [FAO, 2018]), ambos fenómenos fuertemente ligados a la disponibilidad de alimentos nutritivos a precio asequible. El 6,5% de la población regional en 2018 se encontraba en situación de hambre, lo que equivale a 42,5 millones de personas. Ese año marca el cuarto año consecutivo en que el hambre continúa creciendo, situación que sin lugar a dudas se ha visto agudizada por la pandemia del coronavirus. Asimismo es posible mencionar que la inseguridad alimentaria moderada o grave en la región creció hasta alcanzar un 31,1% (medido según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria). Esto se traduce en un aumento de más de 30 millones de personas, lo que hace superar a los 150 millones de personas en esta situación a lo largo y ancho del continente.

Asimismo, es necesario mencionar la crítica situación de malnutrición por peso excesivo, la cual es la más alta del mundo y continúa incrementándose. (FAO et al., 2019) Este fenómeno tiene múltiples causas. Por una parte, el acceso a dietas saludables y nutritivas es el más caro del mundo (FAO et al., 2020), situación que explica tanto por el incremento de la producción destinada a la exportación (lo que genera situaciones de disponibilidad insuficiente de producción de frutas y vegetales, alimentos fundamentales de una dieta saludable, Intini et al. 2019), como también el auge de los alimentos procesados y su exacerbado consumo a nivel regional.

¿QUÉ MEDIDAS PARA AVANZAR HACIA NUEVOS SISTEMAS ALIMENTARIOS?

i) Transformación de la ganadería. La industria ganadera es abrumadoramente responsable del impacto ambiental del sector, tanto por la producción directa, como también por la presión de cultivos utilizados en este proceso, destacando principalmente la soja. Es por ello que la región emite cerca de un tercio de los GEI de la ganadería a nivel global, produciendo apenas una cuarta parte del total de carne vacuna y una quinta parte de las aves (CEPAL-FAO, 2017). La preocupación sobre el impacto ambiental de la ganadería ha crecido de manera considerable a nivel global. Por ello, reconociendo la importancia del sector en la región, consideramos urgente iniciar una transición hacia un nuevo modelo de producción ganadero. Esto debe disminuir radicalmente la ganadería industrial y una activa política de disminución del impacto ambiental de esta industria, mediante uso de tecnologías en la alimentación de los animales, integración en prácticas agroecológicas y fomento a sustitutos en las dietas regionales.

ii) Política agrícola común. Debido al preponderante papel que la agricultura juega en las emisiones de GEI y su esencial rol social y económico, creemos que la región debe crear una política de integración que genere una política agrícola común. Esta debe tener por objetivos: la disminución del impacto ambiental; el aseguramiento de acceso a dietas nutritivas, accesibles y sustentables para la población; la mejora de la distribución de la riqueza generada en el sector (con medidas como desconcentración de la propiedad, mejora en condiciones laborales, entre otras); y la preservación del patrimonio biogenético cultural existente en el sector. Tomando el ejemplo del proceso de integración europeo y su Política Común Agraria, proponemos la creación de instrumentos y acciones colegiadas que fortalezcan el comercio intrarregional y la soberanía alimentaria, con políticas basadas en los principios de la agroecología.

iii) Transición a la agroecología. El impacto ambiental de la agricultura tiene directa relación con la forma de producción asumida hasta ahora. Proponemos avanzar hacia el rediseño de las prácticas del sector, transitando hacia la agroecología, propiciando el menor uso de recursos y energía posibles, utilizando técnicas de diversificación de especies y recursos genéticos, integración de cultivos con la ganadería y uso de insumos orgánicos en la producción. La política agrícola común debe establecer líneas claras de implementación de estos criterios que vayan más allá de la certificación orgánica y monitorear avances para que un porcentaje relevante de la producción se realice a través de métodos agroecológicos, potenciando los circuitos cortos de producción y consumo, que favorezcan el acceso a alimentos frescos y reduzcan el costo de intermediación y las emisiones de GEI por el transporte de alimentos en grandes distancias

iv) En los últimos años ha surgido el creciente proceso de creación de políticas urbanas alimentarias. Es posible definir este concepto como “la acción concertada realizada por parte del gobierno de una ciudad para enfrentar los desafíos relacionados con los sistemas alimentarios.” Estas iniciativas presentan diversas características a lo largo del planeta, ya sea apuntando a la solución de algún problema específico, o abarcando múltiples aristas del sector mediante distintas instituciones y políticas municipales. Algunas han apuntado a los problemas ambientales y climáticos (como San Francisco en EE.UU.), mientras otras se han centrado en la creación

de empleo y fomento a la economía local (como Ciudad del Cabo en Sudáfrica. (IPES-Food, 2017). Cientos de ciudades han construido políticas en esta línea e incluso se ha constituido una organización que agrupa a más de 200 ciudades a lo largo del planeta. , ratificada en el Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas del año 2014, la cual presta asesoría en la materia. Medidas en esta línea podrían ser:

- Fomento a las cadenas locales de producción: considerando las características ya descritas de la producción de alimentos , es posible desarrollar políticas que apunten al crecimiento de formas de producción alternativas, asegurando un suministro de alimentos nutritivos y asequibles para parte importante de la población. Esto puede implementarse a través de la lógica de la "agricultura apoyada por comunidades", mecanismo en el que los consumidores comparten el riesgo existente en la producción (ya sean bajas de precio o baja producción de cultivos) mediante la constitución de cooperativas o el pago de membresías anuales que sostienen de forma más equitativa el esfuerzo de los productores locales.
- Creación de política de manejo de residuos orgánicos y alimentarios: una cifra cercana al 50% de los residuos domiciliarios corresponden a residuos orgánicos. Su disposición en rellenos sanitarios es una política cara, ineficiente y con un altísimo impacto ambiental. Una correcta disposición de estos recursos puede significar un importante ahorro para el municipio, así como el uso eficiente de los recursos orgánicos en la producción de alimentos.
- Economía circular : un espacio privilegiado de innovación para la producción de alimentos corresponde a los esfuerzos en disminución y reutilización de residuos. Al ya mencionado caso de los residuos orgánicos y su uso como fertilizante, se puede sumar una política de uso sustentable de agua, sustitución de pesticidas por prácticas agroecológicas, entre otros.

Referencias Bibliográficas

Baraibar, M. (2020) The Political Economy of Agrarian Change in Latin America, Governance, Development, and Social Inclusion in Latin America.

BID (2019) Cómo llegar a cero emisiones netas. Lecciones de América Latina y el Caribe.

CEPAL (2018) La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: una visión gráfica.

CEPAL (2020) Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Informe Especial COVID-19 N° 5.

CEPALSTAT (2019). Disponible en <https://estadisticas.cepal.org>. Consultado el 04/08/2020.

FAO (2018) Panorama de la Pobreza Rural en Latinoamérica y el Caribe.

FAO, OPS, WFP & UNICEF (2019). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2019.

FAO, FIDA, OMS, PMA & UNICEF. (2020) El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables.

Friedmann, H. and McMichael. P. (1989) Agriculture and the state system: the rise and fall of national agricultures, 1870 to the present. En *Sociología Ruralis*, 29(2).

Gaitán-Cremaschi, D., Klerk, L., Duncan, J., Trienekens, J, Huenchuleo, C., Dogliotti, S., Contesse, M. & Rossing, W. (2010) "Characterizing diversity of food systems in view of sustainability transitions. A review", *Agronomy for Sustainable Development*.

Global Commission on Adaptation (2019) *Adapt Now: A Global call for Leadership on Climate Resilience*.

Intini, J., Jacq, E., Torres, D. (2019). Transformar los sistemas alimentarios para alcanzar los ODS. 2030 - Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, No. 12.

IPCC (2018). *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.*

Kay, C. & Vergara-Camus, L. (2018) Agronegocios, campesinos, Estado y gobiernos de izquierda en América Latina, en *La Cuestión Agraria y los Gobiernos de Izquierda en América Latina. Campesinos, agronegocio y neodesarrollismo*.

Kay, Cristóbal (1999) *Agrarian Reforms: The Latin American Experience*. En *Revista Envío*.

Mason, P. & Lang, T. (2017) *Sustainable Diets. How ecological nutrition can transform consumption and the food system*.

UNEP (2019) Emissions Gap Report.

OECD-FAO (2019) Agricultural Outlook 2019 - 2018.

OXFAM (2016) Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina.

Pettifor, A. (2019) The Case for the Green New Deal.

Pezo, D. (2019) Intensificación sostenible de los sistemas ganaderos frente al cambio climático en América Latina y el Caribe: estado del arte.

Rocha, J. , Baraibar, M., Deutsch, L., de Bremond, A., Oestreicher, J. & Rositano, F (2019) Toward understanding the dynamics of land change in Latin America: potential utility of a resilience approach for building archetypes of landsystems change, en *Ecology and Society* 24(1):17.

Svampa, M. (2016) Debates Latinoamericanos: indianismo, desarrollo, dependencia, populismo.

Otero, G. (2008). Neoliberal Globalism and the Biotechnology Revolution: Economic and Historical Context, en *Food for the Few: Neoliberal Globalism and Biotechnology in Latin America*.

Patel, R. (2013) The Long Green Revolution. *The Journal of Peasant Studies*.40:1

DESARROLLO DEL TALLER

Taller de discusión

El taller de debate se realizó el día 10 de noviembre y se inició con una presentación a cargo de Soledad Barruti. Posteriormente se discutió mediante una metodología de intervenciones abiertas de los participantes, mientras el equipo de NAVE recogió las propuestas planteadas mediante el uso de plataformas de visualización.

El debate se guió por las siguientes preguntas planteadas a los invitados:

1. **¿Cómo convertimos la demanda por transformar los sistemas alimentarios regionales en un movimiento político que una a los actores tradicionales (agricultura familiar campesina, pueblos originarios) con nuevas organizaciones (de consumo responsable, huertos urbanos, entre otros)?**
2. **¿Cuáles son las medidas y políticas públicas más urgentes a nivel nacional y que rol juega la internacionalización del sistema y la soberanía alimentaria? (en relación a la justicia social y ecológica) ¿Qué características debe tener una política alimentaria que garantice acceso, precios justos y diversidad alimentaria a familias de toda la región?**
3. **¿Es factible o necesario construir una política alimentaria común en Latinoamérica?**

ASISTENCIA

Soledad Barruti	Periodista y escritora
Andrés Zurita	Investigador INIA
Alejandra Muñuz	Académica Agronomía UC, Integrante SOCLA
Santiago Peredo	Académico USACH
Eduardo Letelier Araya	Universidad Católica del Maule
Carolina Velásquez	Consultora Políticas Rurales
Rafael Larraín	UC
Mariana Calcagni	Socióloga, Estudiante PhD Freie Universität Berlin, Integrante de CASA
Camilo Corvalán	Agrónomo, Integrante CASA
Andreas Aron	Presidente Cooperativa La Cucha
Hans Aguilar	Funcionario Programa Agroecología Municipio de Puerto Montt
Sofía Bustos	Directora Ejecutiva Actuemos
Valentina Vives	Directora Cooperativa Semilla Austral
Raimundo Marchant	Raíces del Viento
Nadime Reyes	Agrónoma UC, Consultora Agrícola
Isidora Alcalde	Comunicaciones Nuestra América Verde
Rodrigo Echeopar	Coordinador General Nuestra América Verde
Pedro Glatz	Coordinador de Contenidos Nuestra América Verde

PRINCIPALES CONCLUSIONES

i) Crisis del sistema alimentario

Los participantes consideraron que es relevante comenzar a hablar de una real crisis del sistema alimentario en todos los niveles. Las múltiples consecuencias negativas para salud de las personas y el deterioro del medioambiente demandan un discurso más crítico que movilice acciones políticas y sociales para transformar la realidad de nuestros sistemas alimentarios.

ii) Regulaciones globales injustas

Se recalcó el carácter perjudicial que las regulaciones globales que afectan a los sistemas alimentarios tienen sobre la enorme mayoría de los países de ingreso medio y bajo. Entre ellas se mencionaron los tratados de libre comercio, la financiarización de los alimentos, la aplicación selectiva de regulaciones ambientales y sociales, entre otros.

iii) Dialécticas a problematizar

Se propuso realizar un análisis crítico a dos relaciones fundamentales para transformar el sistema alimentario. En primer lugar, se destaca la necesidad de incluir de manera mucho más unida la tradicional división entre producción y consumo. En segundo lugar, dejar de lado la tradicional separación urbano-rural que en muchos casos oscurece la posibilidad de visualizar nuevos imaginarios y prácticas en el sector.

iv) Fomentar sistemas diversos y a escala humana

El privilegio a la producción y distribución enfocada de manera predominante en la exportación tiene numerosas consecuencias negativas a nivel económico, social y ecológico. La configuración de una economía política del sector que fomenta este tipo de producción enfocada en la inserción de mercados globales inhibe la autogestión y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo con mayores niveles de inserción en el territorio. En esta línea se propuso repensar el rol que el Estado puede jugar como promotor de este tipo de sistemas, con medidas de educación, fomento y apoyo financiero. En esa línea se destacó la nutrida experiencia comparada de muchos países de la región que pueden ser replicadas.

v) Colectivizar lo alimentario

Frente a la crisis alimentaria regional que alcanza múltiples decisiones, el discurso predominante apunta a que gran parte de las soluciones a ésta se lograrán mediante cambios en el comportamiento de los individuos. Fue un consenso la crítica a esta visión despolitizada y enmarcada en el contexto neoliberal de resolución de problemas sociales.

vi) Discutir lo común y lo diverso de la región

Se desarrolló un fructífero debate acerca de la pertinencia de establecer políticas agrarias comunes y alimentarias en Latino América. Por una parte, se mencionó las dificultades de realizar este esfuerzo, tanto por los problemas crónicos de integración política y económica que sufre la región, como también por la abrumadora riqueza en biodiversidad, patrimonio genético, climas y relieve presentes a lo largo de los países. Sin embargo, se consideró que la posibilidad de desarrollar sistemas de distribución y transporte localizados en el subcontinente o a nivel subregional, podrían ser iniciativas de positivo efecto en la construcción de sistemas alimentarios más justos.



HEREDAMOS
LA HISTORIA
PERO NO
EL MIEDO

SI EVADES \$250...
TE LLAMAN DELINCUENTE
SI EVADES MILLONES...
TE LLAMAN PRESIDENTE

SI ESTA
SIGUE... LOS
MORIRAN X S

LO SENTO
PERO SI ALGUN DIA CABO
"MIA CHILE" SARA EL DIA EN
QUE REALMENTE CREESA DEL
PUEBLO LIBRE

SI ESTA
SIGUE... LOS
MORIRAN X S



www.nuestraamericaverde.org
www.fes-chile.org